



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

RESOLUCION SCDGN N° 3/21

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2021

VISTA la presentación realizada por el concursante Gonzalo Juan DUARTE ARDOY, en el trámite del concurso para la selección de la terna de candidatos al cargo de *Defensor Público Oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría Nro. 1 (CONCURSO N° 175, M.P.D.)*, en el marco de lo normado en el Art. 51 del Reglamento de Concursos para la selección de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (Res. DGN N° 1244/17 y modificatorias); y

CONSIDERANDO:

Impugnación del Dr. Gonzalo Juan DUARTE

ARDOY:

Comenzó su presentación señalando que existía *“arbitrariedad y error en la valoración de la especialización prevista en el inc. A.3. En este campo, se me ha otorgado tan sólo 6 puntos, circunstancia que resulta desproporcionada y no atiende a la entidad de la actuación del suscripto en el área específica. En tal sentido, no se ha ponderado correctamente que el suscripto se desempeñó como funcionario en la Unidad de Letrados Móviles ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico en el período del 2012 al 2016 (Prosecretario administrativo en 2012 y Secretario de Primera Instancia de 2013 a 2016)”*.

Además, destacó que *“durante los años 2015 y 2016 el suscripto se desempeñó como Defensor Público Coadyuvante en la mentada Unidad de Letrados Móviles ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, habiendo concretado, entre otros actos, intervención en juicios orales y suscripción de recursos y presentaciones jurídicas”*.

Asimismo, expuso que al momento de la inscripción en el presente concurso se encontraba *“actuando como Defensor Público Coadyuvante (Secretario de Primera Instancia) en la Defensoría 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es decir, aun en aquel momento quien suscribe prestaba funciones en un área con competencia en el fuero específico para el cual se concursó”*. En ese mismo orden remarcó que *“la especialización también debió ser analizada ponderando las funciones prestadas en la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento el Terrorismo, del Ministerio Público Fiscal, durante los años 2011 y 2012. Las funciones de dicha dependencia también guardaban relación con la competencia específica de la vacante a cubrir”*.

Luego comparó el puntaje recibido **“no resulta proporcional ni equitativo** que mientras se calificó en este campo a Acosta Güemes con 15 puntos; Ahuad con 14; De Oliveira Mendes con 13; Hernández con 14; Lunati con 11; Reston con 11 y Santos con 14; al suscripto se le hayan asignado tan sólo **6 puntos a pesar de mi desempeño acreditado durante más de cuatro (4) años como funcionario y, en parte, Defensor Público Coadyuvante, en la Unidad de Letrados Móviles ante los Tribunales Orales en lo Penal**

USO OFICIAL

Económico (2012-2016); y de mi función al momento de la inscripción a este Concurso como funcionario y Defensor Público Coadyuvante en una Defensoría con competencia específica en la vacante del concurso (Defensoría Pública Oficial n° 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal – 2019 a la actualidad) (resaltado en el original)”.

En este apartado solicitó la asignación de 14 puntos.

A continuación, se refirió a la puntuación recibida en el marco del inciso b), donde se le otorgaron 8 puntos, solicitando la asignación de 10 unidades.

Para sostener tal postura, recordó que había acreditado la obtención del título de Especialista en Magistratura otorgado por la Universidad Nacional de La Matanza y el título de Master Universitario en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal en la Especialidad de Sociología Jurídico Penal por la Universidad de Barcelona.

Hizo mención a que el título de Especialista en Magistratura obtenido debía ser *“considerada como antecedente relevante en los concursos para la designación de magistrados de este Ministerio Público; ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 32 del Reglamento de Concursos para Magistrados del Ministerio Público de la Defensa”* (conf. Res. DGN 1184/13). También expuso que *“ponderando que las pautas aritméticas contemplan hasta 10 puntos en el caso de Maestrías y Carreras de Especialización, se advierte que el suscripto debería haber obtenido el puntaje máximo en la medida que se ha acreditado la culminación de ambos títulos. Máxime cuando la Carrera de Especialización acreditada ha sido expresamente establecida por la Sra. Defensora General como antecedente especialmente relevante en los concursos para la designación de magistrados de este Ministerio Público (Res. DGN 1184/13)”* (destacado en el original).

Luego avanzó a la etapa de oposición tanto escrita como oral, en las que consideró que se había configurado arbitrariedad y error en la corrección.

Respecto de la primera de ellas, mencionó que si bien en el dictamen se le enrostraba *“Aborda, aunque no con la profundidad que era esperable, el estado de necesidad de su defendido”, “el dictamen omite ponderar que sobre dicho agravio el suscripto citó y relacionó fundadamente con el caso el precedente de la Cámara Federal de Casación Penal, FSA 12570/2019/10 caratulado ‘RODRIGUEZ’. Reg. 5/2021, rta. 05/03/2021, en donde se ponderó la situación especial de necesidad económica y la consecuente configuración de un estado de necesidad para anular la condena de una persona acusada por transporte de estupefacientes. Se comprueba que el Jurado prescindió de reparar en la actualidad y relevancia del precedente citado, lo cual evidencia que no se apreció correctamente la valoración del agravio realizada por el suscripto”* (destacado en el original).



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Con relación a la crítica que se le dirigiera en el sentido de “respecto de la cuestión de género, la vincula con la petición de excarcelación y no con la defensa de fondo”, señaló que *“el Jurado no advierte que dicha actuación respondió a una estrategia de defensa del suscripto, en la medida que las consignas del caso colocaban a los postulantes como Defensores de **ambos acusados**, tanto del esposo como de la esposa. Por lo tanto, la introducción de la cuestión de género en la defensa de fondo podría haber debilitado la defensa y la situación del coimputado, conforme los restantes planteos desarrollados en el examen. **La circunstancia de que el suscripto haya desarrollado en extenso la cuestión de género en el planteo de excarcelación evidencia la correcta visualización de la problemática y el agravio**”* (resaltado en el original).

También advirtió que *“el Jurado ha soslayado que **el suscripto cuestionó adecuadamente los déficits del peritaje de la sustancia estupefaciente**. Se remarcó que el mismo no precisaba la cantidad neta de sustancia, las sustancias de corte ni la pureza de la droga. **Ello permitió a este postulante criticar la finalidad de comercio endilgada, promoviéndose un cambio de calificación**. Este agravio no fue valorado por el Jurado. Por el contrario, se advierte que la valoración positiva de las críticas al peritaje sí fue remarcada por el Tribunal a los postulantes ‘ASURANCETURIX’ y ‘PANORAMIX’”* (destacado en el original).

Por último en este acápite destacó que *“el Jurado ha soslayado que **este postulante se agravió y valoró la separación de los menores de sus padres**, desarrollando ello adecuadamente en los planteos de libertad. Por el contrario, se advierte que la valoración positiva de las críticas de esta cuestión sí fue resaltada por el Tribunal al postulante ‘ESEAUTOMATIX’”* (destacado en el original).

Requirió que su examen escrito fuera valorado con una puntuación no inferior a 68 unidades.

Con referencia a su examen oral, indicó que *“mientras a los postulantes Acosta Güemes, Ahuad y Restón se les valoró en forma positiva las críticas a la calificación legal; dicha ponderación ha sido soslayada en el caso del suscripto pese al correcto y fundado planteo de la cuestión. En efecto, **esta parte detectó y planteó correctamente que en el estadio del caso la calificación debía ser necesariamente considerada provisoria**, y que desde tal perspectiva no podía dejar de ponderarse la posibilidad de que eventualmente no se compruebe la calidad de jefe prevista por el segundo párrafo del art. 15 c) de la ley 24.769. Por lo tanto, se planteó que debía evaluarse el caso bajo la calificación de la figura básica del primer párrafo del art. 15 c) de la ley 24.769, cuya pena mínima en expectativa debía ser valorada a los fines de la excarcelación conforme la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano. Este planteo no fue valorado por el Tribunal. Lo planteado revela que suscripto detectó adecuadamente la problemática concerniente a la calificación. En este sentido,*

se precisa que quien suscribe no ahondó en mayores planteos en torno a la calificación, como por ej. lo relativo a la inconstitucionalidad de la figura de asociación ilícita, en la medida que la consigna del caso precisaba en forma concreta que la audiencia a desarrollarse se relacionaba únicamente a una resolución que rechazó una excarcelación. Desde tal perspectiva, se entiende que no correspondía plantear en dicho acto planteos de fondo o que excedieran los términos de la discusión en torno a la excarcelación” (resaltado en el original).

Solicitó que se incrementara su puntaje hasta una suma no inferior a 29 puntos.

Tratamiento de la impugnación del postulante

Gonzalo Juan DUARTE ARDOY:

Comenzará por señalar el Tribunal, respecto de la queja introducida en el marco del subinciso a3, que no debe perder de vista el quejoso, que la reglamentación establece claramente los criterios a partir de los cuales se procederá a valorar la especialización funcional o profesional; esto es, de los 15 puntos posibles, *“10 (diez) puntos deberán estar necesariamente vinculados al ejercicio efectivo de la defensa o de la función que se evaluara en relación con la vacante a cubrir y el resto deberá relacionarse con actividades en el fueron al que corresponde la vacante. A los efectos de acreditar dichos extremos, los postulantes deberán acompañar copias de escritos con el cargo judicial respectivo o de actas de debate donde figure su actuación, según el caso”*. Asimismo, en el acta de evaluación se hizo expresa mención del modo en que serían considerados los antecedentes correspondientes al rubro.

En tal sentido y tratándose el presente concurso para dar cobertura a un cargo de Defensor Público Oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, aquellos que hubieran demostrado su actividad en dicho fuero e instancia obtuvieron puntajes que quienes acreditaran su actuación, en otros fueros o instancias.

En cuanto a la pertinencia de computar su actuación como Defensor Coadyuvante ante la Cámara Federal de Casación Penal (*“de mi función al momento de la inscripción a este Concurso como funcionario y Defensor Público Coadyuvante en una Defensoría con competencia específica en la vacante del concurso (Defensoría Pública Oficial n° 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal – 2019 a la actualidad”*), es dable suponer que, quizás dicha referencia, obedeció a una confusión del postulante, en tanto además de encontrarse inscripto en el presente trámite, lo esté en el convocado para dar cobertura a cargos de Defensor Público Oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Con relación a la comparación que realiza respecto de la calificación recibida en el rubro por otros postulantes, es dable señalar que mientras el impugnante acreditó haberse desempeñado como Defensor Coadyuvante ante TOPE durante el



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

año 2016 y ante TOC durante el año 2019; la postulante De Oliveira Mendes acreditó su actividad en la defensa ante TOPE en el periodo 2010 a 2019; la postulante Ahuad ante juzgados y cámara en lo penal económico durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019; la postulante Reston ante los juzgados en lo penal tributario durante los años 2013, 2014 y 2015; el postulante Hernández ante los juzgados y cámara penal económico durante los años 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019; la postulante Acosta Güemes en igual fuero e instancia durante los años 2011 a 2019, a más de encontrarse a cargo de una Unidad de Letrados Móviles en dicha jurisdicción y el postulante Lunati en idéntico fuero los años 2018 y 2019. Dado ello, en tanto y en cuanto los postulantes han acreditado un más dilatado ejercicio de la defensa o bien un ejercicio similar, pero dentro del fuero que corresponde a la vacante que concursa, surge claramente que hubieran obtenido mayores puntajes.

Por que respecta a la consideración de las distintas jerarquías desempeñadas a lo largo de su “carrera judicial”, es dable recordar que tal valoración se ha producido en el marco del subinciso a1), donde corresponde.

No se hará lugar a la queja.

En cuanto a las carreras de especialización que acreditara, es dable señalar que la pauta aritmética señalada por el postulante claramente establece “hasta 10 puntos”, como tope (dentro del máximo previsto en el inciso de 12 puntos) en el caso de especializaciones y maestrías. Así, y tal como se estableció en el acta de evaluación, la puntuación asignada en el rubro responde a un criterio compositivo y no aritmético.

En tal sentido, además este Tribunal se ha hecho eco de la directiva incluida en la res. DGN 1184/13, en tanto ha considerado a la carrera de Especialización en Magistratura de la Universidad Nacional de La Matanza, como antecedente relevante posicionándola dentro de los cánones establecidos por la CONEAU (en tanto tal requisito se estableció en la reglamentación aplicable), a pesar de no contar dicha carrera con tal acreditación.

De lo dicho se desprende que la calificación otorgada en el rubro, resulta ajustada, toda vez que de otorgarse el máximo de 10 puntos previsto para el ítem, como solicita el quejoso, implicaría que quedaría por fuera la posibilidad de valorar adecuadamente a aquellos postulantes que hubieran acreditado, mayores antecedentes en el apartado, por ejemplo, dos títulos de maestría, frustrándose así el espíritu que surge de la reglamentación, en cuanto a distinguir la actividad académica de los eventuales aspirantes.

No se hará lugar a la queja.

Por lo que respecta a la etapa de oposición, es del caso recordar que el dictamen de evaluación resulta una apretada síntesis de aquellas cuestiones que por pertinencia u omisión merecen ser mencionadas, en vista de la calificación a ser asignada;

y que no se trata de una enumeración taxativa de todas las cuestiones introducidas por los postulantes en el examen.

Tratándose de un examen técnico, era esperable el desarrollo de todos y cada uno de los elementos que surgían del caso; la mera mención o enunciación de los distintos agravios que se encontraban en juego, no puede ameritar una calificación similar a las obtenidas por quienes procedieron a desarrollarlos. En idéntico sentido debe destacarse que la reiteración de argumentos por parte de los distintos postulantes, no necesariamente hará arribar a una igual calificación, en tanto se encuentran en juego los criterios que marca la reglamentación a los efectos de la evaluación de los exámenes (*“la consistencia jurídica de la solución propuesta, su pertinencia para los intereses de la parte en cuya representación actúa, el rigor de los fundamentos, la corrección del lenguaje utilizado y el sustento normativo, jurisprudencial y dogmático invocado en apoyo de la solución elegida”*, art. 47, segundo párrafo del Reglamento de Concursos).

En este sentido, de todos modos, es dable señalar que más allá de que el postulante haya mencionado el fallo Rodríguez; como se dijo en el dictamen atacado, la cuestión referida al estado de necesidad merecía un desarrollo mayor. De este modo puede advertirse que otros postulantes que realizaron un más pormenorizado análisis de la cuestión, obtuvieron calificaciones superiores, de acuerdo a las circunstancias que surgían de la plataforma fáctica del caso.

Por otra parte y respecto de la cuestión de género, que el postulante señala como parte de una estrategia de defensa, debe destacarse que la presente instancia no puede servir como plataforma para formular aclaraciones de los extremos del examen. Igualmente no advierte este Tribunal el modo en que introducir la cuestión de género en la defensa de fondo, podría representar un menoscabo a la defensa de los intereses que le tocaba representar. Asimismo, huelga la aclaración realizada por el postulante en torno a *“la correcta visualización de la problemática y el agravio”* referido a la cuestión de género, en tanto el Tribunal hizo mención de tal extremo, en el dictamen.

En cuanto al examen oral, las quejas introducidas no hacen más que patentizar la disconformidad del postulante, con la calificación obtenida, por cuanto las observaciones que realiza sobre eventuales errores o arbitrariedades al momento de proceder a la corrección, no se corresponden con los extremos ventilados en el dictamen del que surge claramente que este Tribunal valoró –quizás no en la medida de la expectativa del postulante–, los agravios introducidos: *“Realiza adecuadas citas jurisprudenciales nacionales e internacionales. Desarrolla, aunque no tan profundamente, los riesgos procesales. Si bien no menciona las resoluciones de la CFCP, identifica los agravios en concreto y los desarrolla adecuadamente. Solicita de forma precisa la aplicación del Art. 210 del CPPF. Se destaca el*



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

desarrollo respecto a que la situación de su defendido no puede equipararse a la del coimputado Prete”.

No se hará lugar a la queja.

Por todo lo expuesto, el Jurado de Concurso,

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la impugnación formulada por el postulante Gonzalo Juan DUARTE ARDOY.

Regístrese, notifíquese conforme a la pauta reglamentaria y siga el expediente según su estado.

Se deja constancia que la presente resolución es expresión exacta, literal y textual de la voluntad jurisdiccional de los señores miembros del Jurado de Concurso -Dres. Costilla, Todarello, Figueroa y Revilla-, quienes la conformaron vía correo electrónico a través de las casillas de correo oportunamente constituidas al efecto, por lo que este documento se tiene por firmado válidamente, disponiéndose la publicación en el portal web y su notificación a los postulantes involucrados en los términos reglamentarios para la continuación del trámite. Se deja constancia de que el Dr. Anitua no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Fdo.: Alejandro Sabelli, Secretario Letrado

USO OFICIAL